



La comunidad científica quiere impulsar la sociedad del conocimiento

Xavier Pujol Gebelli

Los grandes indicadores del sistema de ciencia y tecnología español continúan reiterando con insistencia las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la escasa inversión y los deficientes mecanismos de organización y gestión existentes; por otro, el potencial que atesora el sistema para dar un salto de calidad que sitúe el país en la vanguardia de la sociedad del conocimiento. La comunidad científica tiene ante sí la oportunidad de ser protagonista de este cambio. La COSCE, como representante de una parte creciente de esta comunidad, aspira a influir en su configuración.

Durante años, la comunidad científica española se ha definido como pequeña, fragmentada y poco activa. Esta definición en absoluto benévola, y tal vez exagerada en exceso, ha dado pábulo a una de las reivindicaciones más recurrentes en el último decenio: la necesidad de dotar a los investigadores de un elemento de representación a través del cual influir, desde posiciones independientes, sobre las actuaciones de los distintos Gobiernos y proponer medidas, tanto de defensa del colectivo como de puesta en marcha de iniciativas concretas, en las distintas áreas del saber o en la organización del sistema.

En términos anglosajones, a este tipo de agrupación con capacidad de influencia se le denomina *lobby* científico. En Estados Unidos, así como también en algunos países del norte de Europa, su utilidad ha sido más que demostrada. Gracias a un prestigio que nadie pone en duda, fundamentado en la independencia de sus miembros y en la calidad de sus aportaciones, y también a sus conexiones con el entramado social y mediático, económico y político, han sido capaces de defender intereses comunes ante vaivenes coyunturales o impulsar actuaciones en el marco de las ciencias y las tecnologías emergentes.

Bruce Alberts, presidente de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) estadounidense, resumía recientemente el papel de esta organización privada con una sentencia contundente: «Estamos muy preocupados acerca de cómo el Gobierno utiliza la ciencia». Esta preocupación se ha traducido en más de 3000 informes científicos y técnicos elaborados en los últimos años sobre «todo aquello que interacciona con ciencia y sociedad», añadía. Entre ellos, destacan títulos tan sugerentes como los relativos a ¿qué hacer con los residuos radiactivos? o ¿cómo usar las evidencias proporcionadas por el DNA en procesos judiciales?

«El conocimiento científico», agregaba Alberts, «aporta claves para saber cuándo algo es peligroso o su uso entraña un riesgo importante». De ese conocimiento pueden generarse las regulaciones precisas «para validar o negar su uso o exigir modificaciones». A modo de corolario, el científico norteamericano resumía con otra sentencia: «Sólo la ciencia le puede decir a la sociedad a qué debe tener miedo y a qué no».

El conocimiento no es sólo útil para informar o advertir a la sociedad. La propia NAS o la respetada *American Association for the Advancement of the Science* (AAAS), se basan en la ciencia para recomendar

medidas específicas al Gobierno norteamericano sobre regulaciones sectoriales o programas de interés en el ámbito tecnológico. Aunque la AAAS continúa manteniendo a ultranza su independencia, gracias, sobre todo, a la fuerza editorial de sus publicaciones y al propio prestigio de sus miembros, la NAS mantiene abiertos distintos frentes de colaboración con el sector privado y con el Gobierno estadounidense. De acuerdo con las motivaciones, el interés o el impacto social, económico y legal, NAS acepta encargos de informes no vinculantes a través de los cuales pone a disposición del público y de la institución demandante el estado en que se halla una materia concreta. Ocasionalmente, estos informes surgen por iniciativa propia.

Algo similar ocurre con otras instituciones. La más significativa es la *American Heart Association* (AHA). En su día dirigida por Valentín Fuster, su fuerza y respeto social han sido más que suficientes para iniciar campañas sociales de amplia difusión. La más conocida es su cruzada contra el tabaco y la defensa de un estilo de vida saludable como mecanismos de prevención con respecto a las enfermedades cardiovasculares. En Europa, la propia FEBS (Federación Europea de Sociedades Bioquímicas) ha emprendido este camino aunque con tareas de carácter más estructural.

Manifiestos y Pacto de Estado por la Ciencia

Por Pedro García Barreno*

Constituye hoy un principio aceptado plenamente que el desarrollo del conocimiento científico y su aplicación tecnológica son factores esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos, el progreso económico y el prestigio internacional de las naciones. Desarrollo y calidad de vida de los que forman parte la salud, el ambiente, la energía, los recursos naturales, la seguridad y la cultura. Y a la necesaria actuación política para la potenciación de estas actividades han de ir encaminados los sistemas nacionales de orientación, programación y evaluación de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. La ciencia, sin embargo, se ha desarrollado tradicionalmente en España de forma marginal, carente de apreciación social y ajena a los marcos tanto de la cultura ciudadana como de la cultura política y empresarial; quizá, como inmediata consecuencia de su gran desatención insti-

tucional y de la falta de condicionamientos económicos. [...]

De vez en cuando, el colectivo de científicos «levanta» su voz para reclamar la atención de sus gobernantes. El primer «documento» vio la luz en el año 1980; luego, tres versiones más. La última, el llamado Pacto de Estado por la Ciencia, presentado recientemente por la SEBBM. [...]

El tema principal en la disputa suele girar en torno al porcentaje del PIB que debe destinarse al sistema de I+D. Aunque alejado de las cifras que invierten países de nuestro entorno, la inversión por sí sola no es el verdadero cuello de botella de nuestro sistema científico-tecnológico. El fracaso de la política de personal, la ausencia de una gestión del sistema y, sobre todo, la penuria de transferencia de tecnología constituyen, junto con la escasa financiación, el meollo de nuestro tradicional lastre en la arena

de la competitividad internacional. Cualquier incremento en la financiación —que, por supuesto, debe abordarse de inmediato— debe ir de la mano de una conversión conceptual y pragmática: el *gasto* debe ser *inversión*. Y la inversión exige retornos; la única manera de sanear nuestra balanza comercial. Otros ingredientes, también escasos, son el riesgo y la ambición, o iniciativa y espíritu de empresa.

Pero la ciencia y la tecnología exigen para su cultivo un campo bien abonado y que no es otro que la adecuada formación científica de los ciudadanos; sólo así se generará la confianza necesaria en el sistema. Sobre la base de todo ello se ha ido gestando una preocupación creciente, compartida por numerosos comités y comisiones nacionales y por amplios sectores de la ciudadanía, para que los mundos científico-técnico y profano se acerquen un poco más.

* Pedro García Barreno es doctor en Medicina, catedrático de Fisiopatología quirúrgica de la Universidad Complutense. También es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Este texto es un extracto del artículo, de homónimo título, publicado en la revista *Arbor* (febrero 2004).

EN www.sebbm.com SE PUEDE AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN Y CONSULTAR LOS DISTINTOS «MANIFIESTOS» ELABORADOS POR LOS CIENTÍFICOS ESPAÑOLES EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS.

► El caso de España

En España no ha habido tradicionalmente institución alguna capaz de jugar un papel similar. Ocasionalmente, alguna sociedad científica, sobre todo las de carácter médico, ha aparecido en los medios defendiendo posiciones corporativistas o bien como miembro destacado de una campaña social de interés sanitario. Hasta ahora, ni las sociedades científicas en su conjunto, ni las Reales Academias, han ejercido de portavoz o representante de la comunidad científica.

La situación podría cambiar si cristaliza la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la cual se define a sí misma como el primer grupo de

presión español genuinamente científico y con voluntad de influir en las decisiones económicas, políticas y sociales que afectan al sistema de ciencia y tecnología. En esencia, sus objetivos son conseguir un marco adecuado para la educación de las ciencias y la promoción de la investigación como «elementos esenciales» de la nueva economía. La organización, nacida con clara vocación de *lobby*, cuenta en su seno con más de medio centenar de sociedades científicas adheridas que agrupan a unos 25 000 investigadores españoles.

«El nacimiento de la COSCE», según el bioquímico Joan J. Guinovart, presidente del *lobby* científico, «obedece en buena parte a las características propias de la

sociedad española. La situación actual ha llegado a un límite insostenible». «La estructura económica española, basada en los servicios y en la construcción y en la que se observan fenómenos de deslocalización empresarial», agrega, «pueden poner en peligro el bienestar social y económico adquirido en los últimos años». «La única forma de evitarlo», asegura, «es apostar por la ciencia como fuente de bienestar». «Una de las formas de defender esta apuesta», dice, «pasa por el nacimiento de la que, hasta la fecha, es la mayor y más potente agrupación de científicos existente en España. La nueva organización, que aspira a ejercer un papel de liderazgo, es la respuesta a años de intentos, saldados con escaso éxito, para agrupar a la comunidad científica espa-

SILENCIO PRUDENTE

Durante el tiempo en que el Gobierno surgido de las urnas el pasado mes de marzo ha decidido las nuevas estructuras para el sistema de ciencia y tecnología, la COSCE se ha mantenido en silencio «por prudencia y por deferencia», aunque ha lamentado el escaso protagonismo dado hasta ahora por los distintos ministerios implicados en la comunidad científica. «Esperamos que a partir de septiembre la comunidad científica tenga un papel más activo en la construcción del sistema», señala Joan J. Guinovart.

El papel de observador silencioso de la COSCE arranca en febrero de 2004, cuando se hizo pública la propuesta del Pacto de Estado por la Ciencia presentada por los once representantes de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Los partidos políticos del arco parlamentario hicieron suya la propuesta y la incorporaron a sus programas electorales. Pasados los comicios, era casi obligado mantenerse a la expectativa, a la espera de acontecimientos.

Las primeras decisiones adoptadas, sin embargo, no parecen haber sido las esperadas. La desmembración del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la posterior redistribución de competencias entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Industria, con su correspondiente y más que previsible asignación presupuestaria, han puesto el interrogante sobre las primeras decisiones tomadas por el Gobierno. Tan sólo la reiteración de la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero de incrementar los presupuestos destinados a I+D en un 25 % anual, y la corroboración del ministro Solbes de incorporar la ciencia y la tecnología a los presupuestos generales, mantienen la llama encendida.

Como se recordará, la propuesta del Pacto de Estado por la Ciencia transitó durante las pasadas elecciones generales por los programas de prácticamente todos los partidos políticos que componen el arco parlamentario. El resumen particular de cada uno de ellos se tradujo en una expresión común: la escasa inversión en I+D, así como el «disfraz» de los presupuestos destinados a la construcción y adquisición de material militar, habían abocado España a la cola de Europa en, prácticamente, todos los indicadores de la sociedad del conocimiento. La mejora en este capítulo constituyó, de este modo, un nuevo reclamo electoral.

El reclamo ganó enteros en los partidos de mayor representación parlamentaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, con programas específicos destinados a esta cuestión. El primero, como correspondía al partido en el Gobierno antes de las elecciones, planteó la estructura en formato casi continuista, aunque con un compromiso, verbal en todo caso, de hacer un mayor esfuerzo por incorporar alguno de los elementos

esbozados en la propuesta del Pacto de Estado por la Ciencia. Para el segundo, a la postre ganador en los comicios, el programa elaborado en parte a partir de las indicaciones del entonces representante con mayor peso específico en ciencia del partido Socialista, Jaime Lissavetzky, no sólo se asumió el contenido de la propuesta sino que se avanzaron líneas maestras de una futura reorganización del sistema. Las más significativas fueron el incremento sostenido del 25 % de los presupuestos destinados a I+D hasta alcanzar el 2 % del PIB en esta legislatura, y la creación de una Agencia de Financiación capaz de coordinar el dinero destinado.

La vuelta a la realidad tras la campaña electoral puso al Partido Socialista en posición de formar Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, investido presidente, insistió en su discurso de toma de posesión en la «decidida apuesta» por la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo económico de España.

Las primeras decisiones y nombramientos, sin embargo, sorprendieron a todos. De entrada, se nombró a María Jesús Sansegundo ministra de Educación y Ciencia. El nombramiento, en un primer momento, desconcertó a todos aquellos que entendían que debía poner el acento en el segundo apellido del remozado ministerio y no tanto en el primero. Los argumentos eran simples: puesto que las universidades están en su mayor parte transferidas y tan sólo quedaba la conflictiva Ley de Ordenación Universitaria (LOU) en el alero, parecía razonable organizar estas cuestiones más desde la perspectiva política que no de la propiamente ejecutiva. El posterior nombramiento de Salvador Ordóñez como secretario de Estado de Universidades e Investigación, no obstante, junto con las primeras declaraciones de la nueva ministra, revelaron bien a las claras que la primera prioridad era poner orden en la cuestión educativa. Los dos altos cargos en la jerarquía ministerial responden, de hecho, a este perfil.

Salvador Barberà asumió en paralelo el cargo de Secretario General de Política Científica y Tecnológica, la veterana Violeta Demonte la Dirección General de Investigación, Carlos Alejandro, la Dirección General de Política Tecnológica, y Carlos Martínez Alonso la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con este dibujo, el sistema de ciencia y tecnología español pasaba de tener un peso político de primer nivel en forma de ministerio a ocupar, al menos teóricamente, el tercer eslabón en el organigrama formal del nuevo Gobierno.

El desconcierto se acentuó con la disputa nada disimulada sostenida entre el Ministerio de Industria y el de Educación y Ciencia por las competencias del extinto de Ciencia y Tecnología. La pugna se ha saldado, por el momento, con el traspaso a Industria de los grandes programas sectoriales de investigación y desarrollo tecnológico, los cuales repre-

sentan la mayor parte de fondos asignados a I+D. El traspaso, según fuentes ministeriales, supone situar bajo la estela de José Montilla todos aquellos programas con «una clara vinculación» al sector productivo, mientras que la ciencia básica y una parte de la orientada (a medio camino de la «directamente aplicada») queda en Educación y Ciencia. En lo que refiere a innovación, la denominada genéricamente «industrial», entendida en términos de mejora de los procesos productivos, pasa a Industria, mientras que parte de la «tecnológica» (referida a la introducción de nuevos conceptos) a Educación y Ciencia.

La reorganización ministerial es vista desde el Gobierno como un intento de devolver coherencia organizativa al sistema de ciencia y tecnología. Desde sectores críticos, sin embargo, algunos de ellos del propio partido en el Gobierno, se aduce que la nueva estructura no se ajusta a la visión de un organigrama en el que la investigación básica y la aplicada mantienen una estrecha relación con los sectores productivos. Así lo ha manifestado públicamente la COTEC, por ejemplo, organización que agrupa a empresas innovadoras, y destacados científicos que, por el momento, prefieren guardar el anonimato. Entre estos últimos, el principal temor es la vuelta a una estructura, la previa a la llegada al poder del Partido Popular, que ya entonces dio síntomas de agotamiento, en lugar de avanzar hacia una estructura más ágil y eficaz que trascienda los vaivenes políticos.

El arranque del nuevo curso, tras las vacaciones estivales, ha de determinar si los temores son fundados o, por el contrario, se empieza a avanzar en la línea de lo que se reclama en la propuesta del Pacto de Estado por la Ciencia, lanzada en febrero pasado. Algunas indicaciones hacen pensar en una cierta voluntad de caminar en esta dirección. Rodríguez Zapatero, durante los meses de junio y julio, lanzó claros avisos en este sentido, de manera que mantenía viva la promesa de incrementar los presupuestos destinados a I+D. Por su parte, Salvador Ordóñez proclamó en esta misma publicación (ver Boletín *SEBBM 140*), la voluntad de tomar la propuesta como primer documento de trabajo, mientras que Sansegundo anunciaba su intención de empezar a reunirse con los líderes de esta iniciativa a partir de septiembre.

Mientras no se concretan estos pasos, desde la comunidad científica se ha guardado un prudente silencio. Por un lado, para dar tiempo al Gobierno a organizar el nuevo organigrama, y por otro, para valorar, en su justa medida, la idoneidad de las primeras medidas adoptadas. En cualquier caso, no han faltado críticas ante el silencio gubernamental ni tampoco ante los nombramientos y la estructura decidida. En este marco, la COSCE anuncia un «otoño caliente» si las expectativas levantadas durante la campaña electoral no encuentran una respuesta adecuada con el inicio del nuevo curso. #